

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310502120180037601
Proceso: Ordinario
Demandante: LIA ESTELLA GARCIA BURITICA, RICARDO ANTONIO LONDOÑO GONZALEZ
Demandado: AFP PORVENIR S.A.
M. P. MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo: 19 de agosto de 2022
Decisión: Confirma, revoca parcialmente y modifica.

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 22 de agosto de 2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE	RICARDO ANTONIO LONDOÑO GONZÁLEZ representado por su curadora general legítima LÍA ESTELLA GARCÍA BURITICÁ
DEMANDADA	PORVENIR S.A.
LLAMADA EN GARANTÍA	BBVA
ORIGEN	Juzgado Veintiuno Laboral Circuito de Medellín
RADICADO	05 001 31 05 021 – 2018 00376
TEMAS	Pensión de invalidez, principio de condición más beneficiosa, intereses moratorios del art.141 de la Ley 100 de 1993
CONOCIMIENTO	Apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha y hora señaladas, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 13 de la Ley 2213 de 2022 se constituye en audiencia para proferir sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por RICARDO ANTONIO LONDOÑO GONZÁLEZ representado por su curadora legitima LÍA ESTELLA GARCÍA BURITICÁ contra PORVENIR S.A., y BBVA como llamada en garantía.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda¹

El señor Ricardo Antonio Londoño González formula demanda contra Porvenir S.A., pretendiendo se condene a esta AFP **i)** Que en aplicación del principio de condición más beneficiosa, reconocerle y pagarle pensión de invalidez de forma retroactiva desde el 1° de septiembre de 2009 fecha de estructuración de su estado de invalidez; **ii)** se ordene el pago de intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 sobre el retroactivo adeudado o en subsidio la indexación de las condenas; **iii)** costas procesales a cargo de la demandada.

¹ 01PrimerInstancia; 02Demanda(9).pdf

Fundamentó sus pretensiones en que comenzó a cotizar en el extinto Instituto de Seguros Sociales -ISS- a partir del 14 de enero de 1986 y efectuó traslado de régimen con destino al RAIS a través de PORVENIR S.A. en diciembre de 2006.

Fue evaluado por el Grupo Médico Laboral de Seguros de Vida Alfa S.A., quien determinó que el actor tenía una pérdida de capacidad laboral de origen común del 67.40% con fecha de estructuración del 1° de septiembre de 2009, razón por la cual solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a Porvenir S.A., entidad que rechazó la solicitud mediante escrito del 8 de diciembre de 2017 aduciendo falta de requisitos exigidos por la Ley 860 de 2003, por no acreditar 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración.

Oposición a las pretensiones de la demanda

Porvenir S.A.² se opuso oportunamente a las pretensiones de la demanda, argumentando que el demandante no causó el derecho a la pensión deprecada porque no cotizó la densidad de 50 semanas exigidas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez, en tanto desde el 1° de septiembre de 2006 al 1° de septiembre de 2009 solo cotizó 43,85 semanas, reiterando que la norma aplicable es la vigente al momento de la fecha de estructuración de invalidez, aun así, en cuanto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa se encuentra que al hacer el estudio con la norma inmediatamente anterior, esto es Ley 100 de 1993, y los presupuestos establecidos jurisprudencialmente por la H. CSJ para ello, el afiliado tampoco satisface los requisitos exigidos, en tanto a la fecha de estructuración no se encontraba cotizando, ya que dejó de hacerlo en noviembre de 2008, y entre el 1° de septiembre de 2008 y el 1° de septiembre de 2009 solo cotizó 9 semanas, y aplicando la tesis de favorabilidad dispuesta por la H. Corte Constitucional tampoco satisface los requisitos ya que no tiene 150 semanas dentro de los 6 años anteriores, ni 300 semanas en cualquier época, por lo que no configuró una expectativa legítima de pensión.

Excepcionó: prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa en las pretensiones de la demanda y falta de acreditación de los requisitos legales para reconocer la pensión de invalidez-, petición antes de tiempo, compensación, buena fe de la entidad demandada, necesidad del equilibrio financiero del sistema, y la que llamó “innominada o genérica”.

Llamamiento en garantía³

La referida AFP llamó a su vez en garantía a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. como entidad aseguradora con quien se contrató el seguro bajo póliza N° 121 del 1° de febrero de 2009 con vigencia hasta el 31 de enero de 2010, por lo que esta entidad sería la obligada a responder por el capital adicional para el reconocimiento de la pensión de invalidez, así como las demás condenas como intereses moratorios, indexación y costas del proceso, llamamiento que fue admitido mediante auto del 17 de octubre de 2018⁴.

² 01PrimerInstancia; 11ContestacionPorvenir(22).pdf

³ 01PrimerInstancia; 13LlamamientoGarantiaAseguradora(7).pdf

⁴ 01PrimerInstancia; 14AdmiteLlamamientoGarantia(2).pdf

Contestación BBVA -llamada en garantía-⁵

Se opuso a las peticiones del llamamiento en garantía argumentando que el accionante no cumplió los requisitos exigidos por ley para el reconocimiento de la prestación económica, tal y como este lo acepta desde el escrito de demanda, por no contar con 50 semanas cotizadas durante los 3 años anteriores a su invalidez, y tampoco acredita los requisitos jurisprudenciales establecidos por la SL de la H. CSJ ya que la invalidez se estructuró el 1° de septiembre de 2009, fecha posterior a la fecha límite a la que se extendió la vigencia del artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Refiere adicionalmente que el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral expedido por Seguros de Vida Alfa S.A. no le es oponible a la aseguradora porque no tuvo oportunidad de controvertirlo ni de verificar su contenido, Excepcionó: improcedencia de la pensión de invalidez por el incumplimiento de los requisitos legales exigidos para ello, falta de legitimación en la causa por activa, improcedencia de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, improcedencia de condena en contra de Porvenir S.A para el pago de intereses moratorios,

Sentencia de primera instancia⁶

El 25 de mayo de 2021, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia, condenando a Porvenir S.A. a reconocer y pagar en favor de Ricardo Antonio Londoño González, pensión de invalidez de origen común a partir del 13 de julio de 2018 en cuantía equivalente a 1 SMLMV, incluyendo una mesada adicional por año, liquidando por concepto de retroactivo hasta el 20 de abril de 2021 la suma de \$15'470.604, la cual dispuso indexar hasta que se realice su pago. Autorizó a Porvenir S.A. a realizar el descuento de aportes en salud sobre el retroactivo pensional. Declaró probada la improcedencia de intereses moratorios. Condenó a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. a completar el capital ante la AFP Porvenir S.A. para la financiación de la pensión de invalidez. Se abstuvo de condenar en costas a las partes.

Para fundamentar lo decidió, en primer lugar, determinó la validez del dictamen de pérdida de capacidad laboral del 67.4% de PCL, con fecha de estructuración del 1° de septiembre de 2009 y de origen común, emitido por Seguros de Vida Alfa S.A., ello ante la oposición que sobre él formuló la llamada en garantía, indicando que ésta tuvo la oportunidad dentro del proceso ordinario para controvertirlo y no lo hizo. Analizó los parámetros desarrollados por las Altas Cortes respecto del principio de condición más beneficiosa, toda vez que el demandante no cumple con las 50 semanas exigidas por la Ley 860 de 2003, por lo que la prestación debe ser analizada con los requisitos de normas anteriores, para lo cual refirió principalmente a la Sentencia SU556 de 2019 en donde la Corte Constitucional estableció un test de procedencia para el reconocimiento de pensión de invalidez bajo el referido principio, el cual encontró acreditado por contar el demandante **a)** con un estado de invalidez; **b)** estar en condición de pobreza extrema, dada las declaraciones rendidas en el proceso que dan cuenta que depende él, su cónyuge y su hija del ingreso mínimo mensual que ésta última consigue para la subsistencia de los tres, lo que conlleva a que el no reconocimiento de la prestación afecta la satisfacción de sus necesidades básicas; **c)** imposibilidad de continuar cotizado, dado su estado de invalidez; y por último **d)** actuó diligentemente en la

⁵ 01PrimerInstancia; 16ContestacionLlamadaGarantia(34).pdf

⁶ 01PrimerInstancia; 46ActaTramiteFallo.pdf

reclamación de la prestación, toda vez que el dictamen fue emitido el 8 de agosto de 2017, se reclamó administrativamente la prestación el 4 de diciembre de 2017 y se radicó la demanda el 13 de julio de 2018. En tal sentido concluyó acreditado el requisito de 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo establecido por el Decreto 758 de 1990, dentro de la vigencia de dicha norma. Finalmente, en acogimiento a lo dispuesto por la H. Corte Constitucional reconoció la prestación desde la fecha de presentación de la demanda, y no desde la estructuración de invalidez.

Dispuso que la llamada en garantía debe completar el capital necesario para la financiación de la pensión, dada la vigencia de la póliza para la fecha de estructuración de invalidez, y en tanto la prestación se causó bajo los parámetros de la condición más beneficiosa, principio de progresividad y de igualdad establecidos por la Ley 100 de 1993.

Se abstuvo de condenar al bajo de intereses moratorios dado que el reconocimiento de la prestación se hace con base a interpretación jurisprudencial, disponiendo la indexación.

Recursos de apelación:

i) Parte demandante

Inconforme parcialmente con lo decidido, formula recurso de apelación solicitando **a)** modificar la fecha de reconocimiento de la prestación, aplicando el término de prescripción de 3 años, esto es, a partir del 4 de diciembre de 2014, tres años atrás contados desde la solicitud de la prestación; y **b)** se revoque la negativa de reconocimiento de intereses moratorios, toda vez que éstos buscan sancionar la conducta pasiva y negligente de la entidad, pues a ésta no le era dable sustraerse de analizar la prestación bajo el principio de la condición más beneficiosa, que ha sido reconocido jurisprudencialmente.

ii) Porvenir S.A.: depreca se revoque en su totalidad la decisión de instancia, reiterando que el actor no acredita los requisitos de la Ley 860 de 2003 para acceder a la pensión de invalidez, ni tampoco los de la norma anterior que sería la Ley 100 de 1993, y aun cuando la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia establece que con base en este principio se aplica la ley inmediatamente anterior, y no debe buscarse en el tiempo cuál sería más favorable, lo cierto es que el RAIS entró a regir con la entrada en vigencia del sistema pensional, y las normas anteriores le eran aplicables al RPM, por lo que no es viable condenar a la AFP a pagar una pensión de invalidez bajo el Decreto 758 de 1990, puesto que no se tenía una cobertura en el RAIS. Adicionalmente refiere que el actor no cumple con el test de procedencia, puesto que el certificado del SISBEN no lo cataloga como condición de pobreza extrema A1-A5, ni moderada B1-B7, ya que cuenta con un porcentaje C5; tampoco se establece si la enfermedad es crónica o degenerativa, ni tampoco se puede catalogar sobre una vejez puesto que para la fecha en que fue calificado contaba con 59 años, se desprende de la testimonial que el señor trabajaba como independiente y que los gastos del hogar eran compartidos, y posteriormente a su enfermedad su hija fue quien los asumió, adicionalmente a la fecha el demandante se puede valer por si mismo y no requiere de ayuda de terceros para realizar sus actividades diarias; sobre la imposibilidad de cotizar al sistema refiere que

su historia laboral contiene cotizaciones desde marzo de 2017 hasta junio de 2018, sin que se logre evidenciar por qué razón se efectuaron tales cotizaciones, lo cual resulta extraño dado que las testigos refieren que éste no pudo volver a trabajar, por lo que no se desconoce de la relación contractual, pero demuestra que si está en condiciones de cotizar al sistema; finalmente afirma no obró con diligencia en tanto su condición de salud data del 2009 debió realizar los trámites de calificación desde tal momento, pero dejaron pasar aproximadamente 10 años sin hacer ningún tipo de solicitud. Además, refiere que no puede ser condenada a indexar dineros por ser los fondos de pensiones patrimonios autónomos compuestos por las cuentas de ahorro individual de cada uno de los afiliados.

iii) BBVA llamada en garantía: argumenta que la sentencia debe ser revocada en tanto el principio de condición más beneficiosa no está llamado a aplicarse, de conformidad con la Sentencia SL 4650 de 2017 de a H. CSJ, que refiere que este principio aplica solo sobre la norma anterior y dentro de un límite temporal establecido entre 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2006, y en el caso en concreto se pretende una norma anterior a la Ley 100 de 1993 y además con una fecha de estructuración de septiembre de 2009; tampoco es aplicable la SU 556 de 2019 porque el demandante no cumplió las condiciones establecidas para el test de procedencia, en especial la tercera, pues este debió acreditar una razonable imposibilidad de haber cumplido con su deber de cotizar antes del 1° de septiembre de 2009, contrario a ello, siguió cotizando con posterioridad a dicha fecha, y además la testimonial da cuenta que con anterioridad a su estado de invalidez, el demandante se encontraba laborando sin que ninguna de ellas diera cuenta de un estado de salud o física que imposibilitara su cotización al sistema, de manera que no debe ser reconocida la prestación, debiendo en consecuencia exonerar de toda responsabilidad a la AFP y al BBVA.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

Una vez corrido el traslado para alegar en esta instancia, fue descorrido por ambas partes, así:

Porvenir S.A.⁷ reiteró los argumentos expuestos en su recurso de alzada para demostrar que la sentencia debe ser revocada por incumplimiento de requisitos legales para acceder a la prestación deprecada, así como los jurisprudenciales establecidos vía test de procedencia.

BBVA⁸ solicitó revocar la sentencia de instancia bajo los argumentos expuestos al contestar la demanda, sus excepciones y el recurso de alzada.

La **parte demandante**⁹ solicita se modifique la fecha de reconocimiento de la prestación a partir de la fecha de estructuración de invalidez, o en subsidio 2 años contados a partir de la reclamación de la prestación ante la entidad, esto es 4 de diciembre de 2014, y se revoque en cuanto negó los intereses de mora, porque para la fecha en que se solicitó la pensión de invalidez, ya se había consolidado el precedente jurisprudencial de las

⁷ 02SegundaInstancia; 06AlegatosPorvenir.pdf

⁸ 02SegundaInstancia; 07AlegatosBBVA.pdf

⁹ 02SegundaInstancia; 08AlegatosDemandante.pdf

altas cortes, que inició con sentencia SU 769 de 2014, por lo que debió la entidad hacer un análisis objetivo de la prestación teniendo en cuenta la prueba de procedencia fijada por la Corte Constitucional.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, es decir, en consonancia con los puntos que fueron objeto de apelación.

Vistos los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por las demandadas, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe a determinar: **a)** si hay lugar a aplicar el principio de condición más beneficiosa a fin de ordenar el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez. De ser así, se definirá **b)** si procede emitir condena contra Porvenir S.A. de una prestación bajo los requisitos del Decreto 758 de 1990; y **c)** las condiciones de causación y disfrute de la prestación; **d)** la procedencia del pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre el retroactivo pensional.

En virtud del principio de consonancia, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre la orden emitida contra la aseguradora BBVA como llamada en garantía, toda vez que la sustentación de su recurso de alzada se dirigió exclusivamente a argumentar que la parte demandante no acreditó los requisitos necesarios para acceder a la prestación de invalidez deprecada, y la improcedencia de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa por no superar el test de procedencia.

Hechos relevantes acreditados documentalmente

- Ricardo Antonio Londoño González nació el 30 de octubre de 1957¹⁰.
- Acta de sentencia emitida el 14 de septiembre de 2016 por el Juzgado Quinto de Familia de Oralidad de Medellín por medio de la cual se decreta la interdicción por discapacidad mental absoluta del señor Londoño González y se designa a la señora Lía Estella García Buriticá como curadora general legítima principal y a Luisa Fernanda Londoño García como Curadora General Legítima Suplente¹¹.
- Formulario de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral emitida por Seguros de Vida Alfa S.A. el 8 de agosto de 2017 que otorga una PCL del 67.40% con FE del 1° de septiembre de 2009 de origen común¹², la cual fue notificada el 24 de agosto de 2017¹³.
- Solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez del 4 de diciembre de 2017¹⁴.

¹⁰ 04AnexosDemanda(20).pdf, págs. 1 y 2

¹¹ 04AnexosDemanda(20).pdf, págs. 4/7

¹² 04AnexosDemanda(20).pdf, págs. 10/13 y 12AnexosContestacion(49).pdf, págs 9/12

¹³ 04AnexosDemanda(20).pdf, págs. 8/9

¹⁴ 04AnexosDemanda(20).pdf, págs. 17/18 y 12AnexosContestacion(49).pdf, págs 13/17

- Escrito del 18 de diciembre de 2017 por medio del cual Porvenir S.A. niega el reconocimiento de la prestación de invalidez por no acreditar 50 semanas anteriores a la FE¹⁵.

- Según Historia laboral emitida por Colpensiones, actualizada al 31 de octubre de 2017, cotizó 705,43 semanas desde el 1° de diciembre de 1986 hasta mayo de 2000¹⁶. Así mismo obra historia laboral de Porvenir S.A. actualizada al 13 de octubre de 2017, que da cuenta que el demandante cotizó 78 semanas ante el RAIS desde el periodo 12 2006 al de 10 2017¹⁷, acreditando un total de 786 en toda su vida laboral.

- Formulario de traslado del demandante a Horizonte Pensiones y Cesantías, hoy Porvenir S.A., el 03 de febrero de 2003, proveniente del ISS¹⁸.

- Registro Civil de Matrimonio de la señora García Buriticá y el señor Londoño González del 21 de diciembre de 1991¹⁹.

- Registro civil de nacimiento de la señora Lia Estella García Buriticá²⁰ con fecha del 26 de mayo de 1963, y registro civil de nacimiento de Cristian de Jesús Londoño García del 17 de julio de 1997²¹ y de Luisa Fernanda Londoño García el 10 de julio de 1995²², que da cuenta que sus padres son la señora García Buriticá y el señor Londoño González.

- Póliza N°0121 expedida el 1° de febrero de 2009 en que figura como tomador BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. y asegurado AFILIADOS AL FONDO D EPENSIONES “BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías” con la finalidad de prestar cobertura a contingencias de sobrevivencia o invalidez y auxilio funerario, con vigencia hasta el 31 de enero de 2010²³.

- Resultado de consulta realizada en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud -Adres-, que indica al 21 de marzo de 2019 que el demandante se encuentra activo en salud a través de Savia Salud EPS en el régimen subsidiado, con fecha de afiliación efectiva al 1° de julio de 2010 como cabeza de familia²⁴.

- Certificado emitido por Savia Salud EPS el 26 de marzo de 2019, que indica que al señor Ricardo Antonio Londoño Gonzáles no le fueron expedidas incapacidades debido que registra como afiliado al régimen subsidiado²⁵.

- Certificado emitido por SaludCoop EPS en Liquidación, en que se indica que el señor Ricardo Antonio Londoño González tuvo afiliación con dicha entidad desde el 18 de

¹⁵ 04AnexosDemanda(20).pdf, pág. 19 y 12AnexosContestacion(49).pdf, pág. 36

¹⁶ 04AnexosDemanda(20).pdf, págs. 20/23

¹⁷ 04AnexosDemanda(20).pdf, págs. 24/26

¹⁸ 12AnexosContestacion(49).pdf, págs 1/2

¹⁹ 12AnexosContestacion(49).pdf, pág. 26

²⁰ 12AnexosContestacion(49).pdf, pág 25

²¹ 12AnexosContestacion(49).pdf, pág. 28

²² 12AnexosContestacion(49).pdf, pág. 30

²³ 13LlamamientoGarantiaAseguradora(7).pdf. Pág 5 y 17PolizaSeguroInvalidez(15).pdf

²⁴ 23ResultadoConsulta(1).pdf

²⁵ 28RespuestaSaviaSalud(1).pdf

junio de 2008 hasta el 4 de noviembre de 2008, como cotizante del régimen contributivo, y su estado actual es desafiado cura razón es “sin capacidad de pago”, y tenía como beneficiarios a su cónyuge y dos hijos²⁶, sin que figuren incapacidades a su nombre.

- Historia Clínica del demandante²⁷, de ella se desprende que en consulta del 2 de septiembre de 2020 se registran como enfermedades actuales del señor Londoño González las siguientes “*historia de hipertensión arterial, con cirugía de corazón abierto y revascularización, y secuelas de ECV trombótico (afásico y hemipléjico)*”; adicionalmente figura con diagnósticos de hipertensión esencial (primaria) y epilepsia, tipo no especificado, y con antecedentes patológicos de enfermedad coronaria, diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad cerebro vascular.

- Certificado de afiliación del demandante y la señora Lía Estella García Buriticá al PBS Savia Salud EPS, expedido el 19 de noviembre de 2020, en que indica como fecha de afiliación del primero del 21 de mayo del 2019 al régimen subsidiado y de la segunda el 1° de abril de 2012, ambos con nivel de Sisbén 1²⁸.

- Consulta realizada en la Superintendencia de Notariado y Registro con la cédula del demandante y su cónyuge, -21.407.450 y 3.498.681-que da cuenta que éste no tiene propiedades o inmuebles a su nombre²⁹.

- Resultado Puntaje Sisben III al demandante y a la señora García Buriticá de 40.30. ³⁰

- Nota médica emitida por especialista Neurología de la Fundación Instituto Neurológico de Antioquia expedida el 16 de septiembre de 2009 que refiere que el señor Ricardo Antonio Londoño González ingresó en tal fecha “*con severas secuelas de infarto cerebral, se encuentra sin posibilidad de comprender o expresar lenguaje, con parálisis de extremidades derechas, todo derivando en dependencia absoluta. En este estado no puede trabajar, ni responder por su familia. Se prevé larga duración de este estado y pocas posibilidades de recuperación a largo plazo*”. ³¹

- Certificado expedido por Positiva S.A. sobre afiliación de Riesgos Laborales del demandante, donde se acreditan dos relaciones laborales, a) con el señor Erasmo Aníbal Misas Carrasquilla, vinculado como dependiente en el cargo de ayudante de taller, mecánica, vehículos de motor y afines, con fecha de última cobertura el 1° de agosto de 2007 y fecha de retiro el 30 de junio de 2010; y b) Corporación de Acueducto Montañita con vinculación como dependiente, en el cargo de otras ocupaciones, con fecha de última cobertura el 16 de junio de 2008 y fecha de retiro el 5 de diciembre de 2008³².

²⁶ 29CertificadosIncapacidades(4).pdf

²⁷ 33HistoriaClinica(30).pdf

²⁸ 37SolicitudAdicionPruebas(26).pdf págs. 7/8

²⁹ 37SolicitudAdicionPruebas(26).pdf pág. 15 y 16

³⁰ 37SolicitudAdicionPruebas(26).pdf pág. 19/20

³¹ 37SolicitudAdicionPruebas(26).pdf pág. 21

³² 37SolicitudAdicionPruebas(26).pdf págs. 25

a) Aplicación del Principio de Condición más Beneficiosa

En el caso concreto, siendo discutido el reconocimiento de una pensión de invalidez, debe entenderse que, por regla general, tal prestación se regula por la norma que esté vigente en la fecha de estructuración de la PCL, es decir, el literal a) del art. 1 de la Ley 860 de 2003, que exige para la causación de la prestación, además de una PCL igual o superior al 50%, el haber cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de su estructuración, requisito no satisfecho por el demandante, puesto que en dicho lapso acredita 44.14 semanas³³.

Bajo estas circunstancias, es procedente analizar la aplicación del principio de condición más beneficiosa, como se solicita en la demanda. Dicho principio, se ha desarrollado, ante la ausencia de un régimen de transición, con “la única finalidad de proteger a «[...]un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho adquirido en sentido riguroso, se ubican en una posición intermedia, habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta» esto es, que tuvieran una expectativa legítima”³⁴.

Para la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, el tránsito legislativo que admite la aplicación del principio, refiere estrictamente a la norma inmediatamente anterior a la que se encuentre vigente al momento de materialización del riesgo y de manera temporal, de ahí que considere aplicable, en relación con la PCL estructurada en vigencia de la Ley 860 de 2003, aplicar los requisitos de la Ley 100 de 1993 primigenia, siempre que estos se cumplan antes del 26 de diciembre de 2006³⁵, pero ellos no fueron satisfechos por el señor Ricardo Antonio Londoño González.

Para esa Corporación deviene improcedente acudir al principio de condición más beneficiosa en el tránsito legislativo Ley 860 de 2003 y Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por considerarlo violatorio del principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones; sin embargo, **la Corte Constitucional**, en ejercicio de su función como Órgano de Cierre de la Jurisdicción Constitucional, difiere de esa postura, considerando y precisando en las sentencias **SU-442 de 2016 y SU -556 de 2019**³⁶ que es viable aplicar el principio de condición más beneficiosa en el referido tránsito legislativo, siempre que el afiliado haya satisfecho la densidad de semanas exigida por esa norma, antes de expirar su periodo de vigencia y supere el test de procedencia definido en la sentencia SU-556 de 2019:

Test de procedencia	
Primera condición	Debe acreditarse que el accionante, además de ser una persona en situación de invalidez ³⁷ , pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en una situación de riesgo derivada de, entre otras, alguna de las siguientes condiciones: (i) analfabetismo, (ii) vejez, (iii) pobreza extrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento

³³ 12AnexosContestacion(49).pdf, pág. 44

³⁴ Sentencia SL2544 de 2019, haciendo cita y transcripción parcial de la 38674 de 2012

³⁵ Reitera la postura previamente adoptada, en sentencia SL 3161 de 2019, haciendo mención y transcripción parcial de las sentencias SL 2358 de 2017 y SL658 de 2018

³⁶ En esta sentencia, se fija el test de procedencia de la aplicación del principio en sede de Acción de Tutela, como consecuencia de que no se había construido el mismo en la sentencia SU 446/16

³⁷ Esta se acredita con una calificación de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%.

	o (vi) padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa.
Segunda condición	Debe poder inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del accionante, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.
Tercera condición	Deben valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar su imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigente al momento de la estructuración de la invalidez.
Cuarta condición	Debe comprobarse una actuación diligente del accionante para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez.

Esta Sala viene apartándose respetuosamente del precedente judicial construido por la H. Corte Suprema de Justicia, por considerar que el de la H. Corte Constitucional se adecúa más a los principios del Estado Social y Constitucional de Derecho, así como de los que orientan las relaciones al interior del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, máxime al negar ésta última Corporación, que la sostenibilidad financiera del Sistema se vulnere al aplicar la condición más beneficiosa en un tránsito legislativo no inmediato, en la medida en que el número de semanas que exigía el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, era incluso superior al que hoy exige la Ley 860 de 2003.

Exigía el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, vigente hasta el 31 de marzo de 1994, inclusive, “haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez”.

b) Entidad encargada del pago de la prestación

Ahora, para resolver el motivo de inconformidad de Porvenir S.A. en cuando a que no debe ser condenada a pagar una pensión que corresponde únicamente a Colpensiones por no tener cobertura para las prestaciones causadas bajo el Decreto 758 de 1990, ha de indicarse que no le asiste razón a la AFP, toda vez que en aplicación del principio de la condición más beneficiosa se estudia la prestación con base a los requisitos exigidos por la norma anterior por contener la norma vigente condiciones más regresivas para el afiliado, de tal manera lo que determina la entidad encargada del reconocimiento de la prestación es la fecha de estructuración de la invalidez, que en este caso ocurrió en el año 2009, momento para el cual el señor Londoño González estaba válidamente afiliado a la AFP del RAIS, quien contando con los recursos para asumir la prestación, debe ser la entidad encargada de su reconocimiento.

Valorada la prueba arrimada al expediente, se concluye que **el demandante satisface el de procedencia del principio de condición más beneficiosa**, así:

Test de procedencia	
Primera condición	<p>Se acreditó que el señor Londoño González, además de ser una persona en situación de invalidez, se encuentra en una situación de riesgo derivada del accidente cerebro vascular, igualmente padece de hipertensión arterial que es una enfermedad crónica; padece epilepsia clasificada como enfermedad crónica degenerativa y tiene antecedentes patológicos de diabetes mellitus, catalogada también como enfermedad crónica y catastrófica.</p> <p>Además, es dable concluir, como lo hizo acertadamente el Juez A Quo, que el demandante se encuentra en una situación de extrema pobreza, pues según se desprende de la documental allegada tanto el demandante y su cónyuge están clasificados en nivel de Sisbén 1³⁸, lo cual encuentra respaldo en las declaraciones por la señora Lia Estella García Buriticá y su hija Luisa Fernanda, quienes al narrar sobre las condiciones familiares y económicas cuentan que tanto Lía Estella como el señor Ricardo Antonio eran los encargados de los gastos del hogar, que antes del accidente sufrido por éste, laboraba como independiente en lo que le surgiera, y con posterioridad a su padecimiento no pudo volver a trabajar, por lo cual su hija al terminar sus estudios de básica secundaria ha sido quien ha asumido los gastos del hogar con un salario mínimo mensual vigente, sin que la señora Lía Estella cuente con ingresos permanentes o fijos en tanto ha trabajado esporádicamente en casas de familiar, y desde la pandemia dicha labor se ha visto afectada. En tal sentido, resulta palmario que los ingresos fijos del hogar representados en el salario mínimo percibido por la hija son la única fuente de ingresos, que resultan insuficientes para sufragar las necesidades básicas de todo un hogar.</p>
Segunda condición	<p>Se infiere razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del señor Londoño González, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas, pues es una persona que no percibe ingresos de ninguna actividad económica; se dedicaba a distintas labores como ayudante de obra o ayudante de taller, y debido al accidente cerebrovascular ocurrido en el 2009 no pudo seguir laborando.</p>
Tercera condición	<p>Es razonable que no haya efectuado cotizaciones al Sistema Pensional para el año 2009 en que se estructura la PCL que ha derivado en su invalidez, pues de la documental allegada, logra desprenderse que el grado de escolaridad</p>

³⁸ 37SolicitudAdicionPruebas(26).pdf págs. 7/8

	<p>del demandante es de básica primaria³⁹, y en los años 2007 y 2008⁴⁰, anteriores al infarto cerebral, tuvo trabajos dependientes como ayudante de taller y en otras ocupaciones. Adicionalmente, la señora Lía Estella refirió en su deponencia que el demandante al momento del accidente, trabajaba con un oficial independiente y éste ayudaba en la labor de reforma de apartamentos, pero advierte que el oficial de obra no lo tenía afiliado a ninguna EPS; de ello también da cuenta Luisa Fernanda su hija, quien refiere que al momento del accidente este trabajaba como independiente, no trabajaba en una empresa.</p> <p>Por tales circunstancias, y dada la conocida informalidad del gremio de la construcción, especialmente de los ayudantes de obra, se entiende que éste no tuviera capacidad de pago para asumir las cotizaciones respectivas para tales labores, lo que también se haya respaldado con certificado emitido por SaludCoop EPS en el que se indica que el demandante tuvo afiliación con dicha entidad desde el 18 de junio de 2008 hasta el 4 de noviembre de 2008, como cotizante del régimen contributivo, y su estado actual es desafiliado bajo razón “sin capacidad de pago”⁴¹.</p>
Cuarta condición	<p>Obró diligentemente al solicitar el reconocimiento de la prestación. Fue calificado por Seguros de Vida Alfa S.A. el 8 de agosto de 2017⁴². Reclamó la prestación el 4 de diciembre de 2017⁴³ y ante la negativa de Porvenir S.A. mediante comunicado del 18 de diciembre de 2017⁴⁴, radicó la demanda el 13 de julio de 2018⁴⁵.</p> <p>Aun cuando entre el accidente ocurrido el 1° de septiembre de 2009 que concluyó en el estado de invalidez del actor, y la fecha de calificación transcurrieron alrededor de 8 años, ha de entenderse superado este requisito dada la causa neurológica de su enfermedad, como se desprende de la nota médica de especialista neurólogo que refiere “(...) <i>severas secuelas de infarto cerebral, se encuentra sin posibilidad de comprender o expresar lenguaje, con parálisis de extremidades derechas, todo derivando en dependencia absoluta. En este estado no puede trabajar, ni responder por su familia. Se prevé larga duración de este estado y pocas posibilidades de recuperación a largo plazo</i>”.⁴⁶ lo que además explica que haya sido decretada la interdicción por discapacidad mental absoluta del demandante, siendo designada Curadora General Legítima a su cónyuge, señora Lía Estella García Buriticá⁴⁷.</p>

³⁹ 04AnexosDemanda(20).pdf, págs. 10/13 y 12AnexosContestacion(49).pdf, págs 9/12

⁴⁰ 37SolicitudAdicionPruebas(26).pdf págs. 25

⁴¹ 29CertificadosIncapacidades(4).pdf

⁴² 04AnexosDemanda(20).pdf, págs. 10/13 y 12AnexosContestacion(49).pdf, págs 9/12

⁴³ 04AnexosDemanda(20).pdf, págs. 17/18 y 12AnexosContestacion(49).pdf, págs 13/17

⁴⁴ 04AnexosDemanda(20).pdf, pág. 19 y 12AnexosContestacion(49).pdf, pág. 36

⁴⁵ 01PrimeraInstancia; 02Demanda(9).pdf

⁴⁶ 37SolicitudAdicionPruebas(26).pdf pág. 21

⁴⁷ 04AnexosDemanda(20).pdf, págs. 4/7

De las cotizaciones posteriores a la fecha de estructuración de invalidez.

Para resolver lo apelado por Porvenir S.A. sobre las semanas de cotización que figuran entre marzo de 2017 y mayo del 2018 realizadas como independiente por parte del demandante, con posterioridad a la fecha de estructuración de la PCL, ha de indicarse que éstas no podrán tenerse como válidamente presentadas ya que éstas no obedecen a un efectivo servicio prestado en ejercicio de capacidad laboral, porque, carece de ella, su PCL se estructuró en la misma fecha del accidente que le generó el infarto cerebral, con las respectivas secuelas funcionales y de movilidad, que derivó en su posteriores declaratoria como incapaz absoluto, no pudiendo efectuar una prestación real del servicio.

c) Causación y disfrute de la pensión de invalidez

Acreditado en el proceso que Ricardo Antonio Londoño González cotizó más de **700 semanas en toda su vida laboral**⁴⁸, **de las cuales 362.15 se acreditaron al 21 de junio de 1993**, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y estructurada el 1° de septiembre de 2009 una pérdida de capacidad laboral superior al 50% conforme al principio de condición más beneficiosa, le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez deprecada, debiendo **confirmarse** la sentencia venida en apelación.

Hay lugar a **modificar** lo decidido en cuanto al disfrute de la prestación, la cual se entiende causada desde el día siguiente a la fecha de estructuración de la PCL misma, pues no obra prueba de que se emitieran incapacidades al demandante en momento previo, sin que haya lugar a considerar que haya operado prescripción de mesada alguna, por cuanto, según la documental allegada al plenario, el hoy demandante es incapaz absoluto, siendo decretada la interdicción por discapacidad mental absoluta mediante sentencia del 14 de septiembre de 2016, proferida por el Juzgado Quinto de Familia de Oralidad de Medellín en el proceso de radicado 05001 31 010 005 2016 00303, donde se nombró a la señora Lía Estella García Buriticá como curadora general legítima principal y a Luisa Fernanda Londoño García como Curadora General Legítima Suplente⁴⁹.

La prestación será reconocida en cuantía equivalente a la pensión mínima para cada año, pues de la historia laboral del demandante se desprende que sus cotizaciones se efectuaron sobre un ingreso base de cotización que no superaba el salario mínimo para cada oportunidad tal y como lo dispuso el Juez A Quo.

Aun cuando no fue objeto de recurso de apelación el número de mesadas a reconocer en favor del demandante, por tratarse de un derecho mínimo fundamental e irrenunciable, la Sala oficiosamente **modificará** la sentencia de instancia, en el sentido de indicar que Porvenir S.A. pagará al demandante catorce (14) mesadas por año, por

⁴⁸ 04AnexosDemanda(20).pdf, págs. 20/23

⁴⁹ 04AnexosDemanda(20).pdf, págs. 4/7

haberse causado la prestación con antelación al 31 de julio de 2011 y ser inferior a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes (3 SMLMV)⁵⁰.

Porvenir S.A. reconocerá y pagará al hoy demandante la suma de Ciento Veintisiete Millones Quinientos Veintiocho Mil Cuarenta y Nueve pesos (\$127.528.049) por concepto de retroactivo de mesadas de pensión de invalidez, causado entre el 2 de septiembre de 2009 y el 31 de agosto de 2022, detallado como aparece a continuación:

AÑO	VALOR MESADA	Nº MESADAS	VALOR
2009	\$ 496.900	4 y 29 días	\$ 2.467.937
2010	\$ 515.000	14	\$ 7.210.000
2011	\$ 535.600	14	\$ 7.498.400
2012	\$ 566.700	14	\$ 7.933.800
2013	\$ 589.500	14	\$ 8.253.000
2014	\$ 616.000	14	\$ 8.624.000
2015	\$ 644.350	14	\$ 9.020.900
2016	\$ 689.454	14	\$ 9.652.356
2017	\$ 737.717	14	\$ 10.328.038
2018	\$ 781.242	14	\$ 10.937.388
2019	\$ 828.116	14	\$ 11.593.624
2020	\$ 877.803	14	\$ 12.289.242
2021	\$ 908.526	14	\$ 12.719.364
2022	\$ 1.000.000	9	\$ 9.000.000
TOTAL			\$ 127.528.049

La mesada pensional para el año 2022 se continuará pagando en Un Millón de Pesos (\$1'000.000).

En este sentido será **modificada** la sentencia en materia de apelación.

d) Intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993

El art.141 de la Ley 100 de 1993 dispone que “a partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago”.

El Art. 19 del Decreto 656 de 1994⁵¹ autorizó al Gobierno para establecer los plazos de reconocimiento de las Pensiones, sin que, en ningún caso exceda de cuatro meses⁵². La Corte Constitucional en la sentencia SU-975 de 2003 sentó que debe aplicarse la regla mencionada y como no se dispuso legalmente un plazo diferente para satisfacer esta prestación, por analogía (art 145 del CPTSS), debe entenderse que, en materia de pensión de invalidez, el plazo para su reconocimiento es de cuatro meses contados

⁵⁰ Acto Legislativo 01 de 2005. Art.1 Parágrafo transitorio 6o. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8o. del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año

⁵¹ Decreto declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia No. C-376-95 del 24 de agosto de 1995, Magistrado Ponente, Dr. Jorge Arango Mejía.

⁵² En este sentido se legisló para la pensión de vejez en el Artículo 9 Parágrafo 1o. Inciso Final de la Ley 797 de 2003.

desde que se eleve la reclamación administrativa, tal y como lo interpreta la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, acogida por esta corporación de segunda instancia⁵³.

En torno a dicho aspecto se resalta que: (i) la negativa de Porvenir S.A. al reconocimiento de la prestación no fue arbitraria, por fundamentarse en parámetros legales vigentes en la época de reclamación del señor Ricardo Antonio Londoño González. (ii) La condena al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, se impondrá en atención a la aplicación del principio de condición más beneficiosa, previa aplicación de otro concepto de naturaleza jurisprudencial, por tanto, no procede condenarla al pago de intereses moratorios⁵⁴, y en tal aspecto será confirmada la sentencia de instancia.

No se acogerá lo apelado por Porvenir S.A. en cuanto refiere a que no debe disponerse la actualización de la condena, puesto que para garantizar que el demandante perciba lo adeudado en su real valor, procede la indexación de la condena; para ello, la demandada tomará la fórmula que ha sido avalada por la H. Corte Suprema de Justicia en la materia:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} = \text{V. ACTUALIZADO}$$

Los valores con los que ha de reemplazarse la fórmula deben ser:

El ÍNDICE FINAL certificado por el DANE que corresponde al de la fecha en que haya de efectuarse el pago;

El ÍNDICE INICIAL corresponde a la fecha de exigibilidad de cada mesada pensional, puesto que son prestaciones periódicas.

El VALOR A INDEXAR corresponde al valor de cada reajuste a indexar.

En ese punto se **confirmará** la sentencia apelada.

III. EXCEPCIONES

Las excepciones formuladas por la demandada han quedado implícitamente resueltas por haberse causado lo pretendido en la demanda, mereciendo especial pronunciamiento la excepción de prescripción que no operó, según lo analizado en líneas atrás.

IV. COSTAS

Costas en esta sede a cargo de la BBVA –llamada en garantía-, por haber resultado vencida en su recurso. Agencias en derecho en la suma de 1SMLMV para el año 2022 en favor de la parte demandante.

⁵³ Ver entre otras, la sentencias SL14269 de 2014, SL 2150 de 2017 y SL 1562 de 2019

⁵⁴ Ver sentencia SL

V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 25 de mayo de 2021 por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario de doble instancia promovido por RICARDO ANTONIO LONDOÑO GONZÁLEZ a través de su Curadora Legítima Lía Estella García Buriticá contra PORVENIR S.A., en la que fue llamada en garantía BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., **revocándola parcialmente y modificándola** como se precisa a continuación:

- El derecho al disfrute de la pensión de invalidez del demandante se presentó el 2 de septiembre de 2009 y se pagarán catorce (14) mesadas al año.

- Porvenir S.A. pagará al demandante, debidamente indexada la suma de Ciento Veintisiete Millones Quinientos Veintiocho Mil Cuarenta y Nueve pesos (\$127.528.049) por concepto de retroactivo pensional causado entre el 2 de septiembre de 2009 y el 31 de agosto de 2022, así como las mesadas que en lo sucesivo se causen hasta su pago.

SEGUNDO: Costas en esta sede a cargo de la BBVA –llamada en garantía- y en favor de la parte demandante. Agencias en derecho en la suma de 1SMLMV para el año 2022.

Se ordena notificar lo decidido por Edicto.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN